

CRISIS, OPCIONES POLÍTICAS Y ROL DE LAS FUERZAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA

Edgar JIMÉNEZ C.

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Fuerzas sociales del campo dominante*. III. *El proyecto político neoconservador de la derecha latinoamericana*.

I. INTRODUCCIÓN

En el amplio espectro de los grupos de presión e interés el objetivo del artículo es el de analizar el rol de las fuerzas sociales (grupos de presión) del campo dominante en los procesos políticos de América Latina en la década actual, como resultado de la crisis económica que es global y genérica a nivel regional.

Entendemos por fuerzas sociales al conjunto de organizaciones sociales que por su importancia y capacidad para influir en la opinión pública, en los gobiernos y en los partidos políticos, son considerados como actores de innegable importancia en los escenarios políticos nacionales, pero que no se plantean la toma del poder.

En el marco de la sociología política, las fuerzas sociales se equiparan a grupos de presión, que se distinguen de otras fuerzas políticas por:

- a) Su organización;
- b) Su capacidad de ejercer presión;
- c) El interés político-económico del que son portadores;
- d) Las formas y medios de acción de los que disponen;
- e) El tipo de asociados, donde la fidelidad y la confianza superan los niveles de participación que se dan a nivel partidario;
- f) La variada gama de grupos de presión que existen en la actualidad: patronales, sociales, religiosos, de interés, de ideas, transitorios, de interés altruista, etcétera. Esto permite que los asociados participen en varios grupos a la vez, situación ésta que normalmente no se da en los partidos.

- g) En el ejercicio de la presión o de una u otra forma de acción legal o ilegal no están sujetos a la sanción de la opinión pública, lo que les garantiza un amplio margen de maniobra. Situación que tampoco sucede en el caso de las acciones de las fuerzas políticas;
- h) El carácter internacional asumido por algunos grupos de presión, sobre todo los patronales o empresariales, lo que les permite disponer de un espacio de acción geográfica muy amplio, y al mismo tiempo gozar de una apertura también diversificada.
- i) En algunos casos (como en Chile, Bolivia y El Salvador), asistimos al surgimiento de grupos distintos a los de presión, considerados en el enfoque que mencionamos como grupos de interés; en particular los grupos paramilitares, las ligas anticomunistas, etcétera, por su organización, militancia, objetivos y formas de acción difieren de las formas tradicionales de fuerzas sociales y más aún de las fuerzas políticas.

Sin duda alguna, un intento de clasificación más simple tipifica a las fuerzas sociales a partir de la consideración del campo dominante o dominado, e incluso en cada uno de ellos a las diversas organizaciones patronales, sindicales, oficiales, independientes, grandes, medianas, pequeñas, universidades, Iglesia, etcétera.

Otro tipo de consideración nos obligaría a definir a las fuerzas sociales por su ubicación político-ideológica, es decir, de derecha, centro o izquierda.

En los casos mencionados, ambas modalidades han sido utilizadas indistintamente por los analistas sociales.

II. FUERZAS SOCIALES DEL CAMPO DOMINANTE

Normalmente son consideradas como integrantes de este campo a las organizaciones empresariales, grupos corporativos, fuerzas sociales de derecha, frentes empresariales, organizaciones del sector privado, etcétera, considerados como tales grupos de presión y de interés.

Nosotros preferimos conceptualizar al conjunto de organizaciones tanto del sector empresarial como a las de los sectores dominantes, en el rubro fuerzas sociales, en la medida en que no constituyen partidos políticos.

Por su carácter, las fuerzas sociales de la clase dominante operan en un nivel distinto al de los partidos políticos, defendiendo intereses particulares, aunque ello no obsta para que de alguna manera se cons-

tituyan en instrumentos de expresión política. La diferencia con los partidos políticos descansa en que éstas expresan los intereses de los sectores y fracciones sociales que la integran, y son los canales o mecanismos de mediación entre la sociedad civil y la sociedad política. El objetivo de los partidos políticos o fuerzas políticas es la toma del poder, su ejercicio y mantenimiento; en cambio, las fuerzas sociales o grupos de presión buscan influir en las decisiones políticas, de manera que sus intereses se traduzcan en forma de disposiciones jurídicas. En otras palabras, forman parte del espacio de los mecanismos que hacen posible la decisión política y se constituyen en actores cuya voluntad prevalece en la decisión o política económica.

Por otra parte, ninguna fuerza social, desde la perspectiva política, contiene en sí misma una significación propia, sólo puede ser conocida y aceptada como tal a condición de situarla en el régimen político en el que debe actuar. Esto quiere decir que los sistemas políticos en los que actúan, permiten y garantizan que las fuerzas sociales activen una serie de mecanismos que expresan sus prácticas sociales y económicas. De manera tal que el Estado determina las condiciones de las relaciones políticas en el interior de las cuales actúan las organizaciones o grupos de presión. Así como establece en la sociedad política su sistema institucional o aparato del Estado, con sus distintas variantes, el poder público garantiza, permite o limita la creación del sistema organizacional de las fuerzas sociales en la sociedad civil que expresan determinadas conductas colectivas de carácter social y político, tal como ya se dijo.

De otra manera no podría entenderse el proceso de constitución de la hegemonía y legitimación, máxime que ambas no pueden considerarse como un simple derivado superestructural. Constituyen un esfuerzo permanente, llevado al cabo por una multitud de agencias, organizaciones y grupos de presión, dirigidos a crear un consenso nacional y en su caso a plantear un proyecto alternativo.

Las clases dominantes necesitan mantener, fomentar y proteger el orden establecido, basado en el poder de la minoría. Por lo tanto, además de recurrir a la represión, coerción y persuasión, hacen uso de sus organizaciones de la sociedad civil para lograr el consentimiento. La organización de éste es tarea fundamental de la empresa privada a través de sus múltiples organizaciones; cumplen con funciones ideológicas aunque se presenten con los más distintos ropajes, se presentan en distintas áreas de la sociedad respaldadas por recursos económicos y de autoridad normalmente invocando el interés supremo de la nación.

La conceptualización que proponemos para el caso de las organizaciones empresariales nos lleva a caracterizarlas como grupos de presión con intereses políticos debido al peso que tienen en la orientación de la sociedad. La organización, sea industrial, comercial o financiera, lleva en sí misma el modelo racionalizador que orienta la actividad social.

Si entendemos a la empresa a partir de las relaciones entre racionalización y política, debemos distinguir en su estudio dos niveles: el nivel organizativo y el político.

En el nivel organizativo, la empresa se organiza racionalmente (adecuación de medios a fines), mediante la mejor utilización posible de sus recursos humanos y financieros. En el segundo nivel, el político, el crecimiento y unidad de estos grupos aparece definido por la capacidad para combinar, en sus programas en corto y largo plazo, los recursos disponibles "lo que muestra a la organización sometida a objetivos políticos, que *afectan a la sociedad en su totalidad*".

Una vez identificados esos dos niveles, conviene distinguir los elementos de su sistema de acción:

- Principio de defensa o identidad.
- Principio de oposición.

Aunque es indispensable tomar en cuenta los niveles organizativo y político y los principios que orientan su acción, el proyecto del cual son portadores define sus relaciones con el Estado y la sociedad en general.

Otra cuestión importante es la incidencia ideológica y económica de estas organizaciones empresariales sobre el conjunto de la sociedad latinoamericana. De hacer una ponderación de lo estratégico del sector económico en que operan sus miembros, el poder económico y el número de sus asociados, puede decirse que este sector es el pivote del sistema económico.

Las funciones que desempeñan las organizaciones del campo dominante han variado en el correr de las diversas etapas por las que ha atravesado la región. En el pasado, y según los países, dada la ausencia de un partido político estrictamente clasista, la burguesía tendió a crear organizaciones o a politizar las existentes, como reacción de defensa en coyunturas caracterizadas por la agudización del conflicto político.

En la actualidad dichas organizaciones cumplen dos funciones principales:

- 1) Como organizaciones de clase que en la situación de conflicto expresan a la burguesía como fuerza social principal.
- 2) Como grupos de presión que en periodos de relativa estabilidad les sirven a los distintos empresarios como gestores administrativos de sus intereses ante los aparatos del Estado.

Así, en el momento actual cuando la pugna política se ha agudizado por el ascenso general del movimiento popular, las organizaciones empresariales refuerzan su unidad, autoconciencia y organización, potencian su presencia ideológica política y expresan con mayor claridad su proyecto de clase. Es la hora de los organismos cúpula, de los líderes empresariales, de los grandes y ruidosos pronunciamientos ideológicos. La inquietud y el temor de los empresarios repercute en el interior de sus organizaciones poniéndolas en tensión y aprestándolas para la defensa política e ideológica. Se acentúa así entonces la función política de aquellas organizaciones.

Esta situación los ha convertido en *grupos de poder*, por su importancia económica, por su influencia en el ámbito político del aparato estatal y finalmente por su capacidad para imponer un determinado sistema de valores a la sociedad.

Con base en lo anterior distinguimos dos tipos de fuerzas sociales de la clase dominante.

Grupos de presión (organizaciones sociogremiales)

La modernización económica regional durante la década del cuarenta y el proceso de industrialización iniciado en los años cincuenta, al igual que la ampliación del Mercado Común Centroamericano y Latinoamericano en los sesenta, crearon las condiciones para que la tradicional oligarquía agrominera exportadora compartiera el poder con nuevos grupos de empresarios, modernizando al mismo tiempo sus formas de organización social y política.

Con la presencia de estos nuevos grupos empresariales en el mercado económico interno y regional, surgieron las organizaciones sociogremiales: la Asociación Nacional de la Empresa privada; los consejos coordinadores empresariales, las cámaras de comercio e industria. Estas nuevas organizaciones superaron a los órganos tradicionales de la oligarquía, las asociaciones de agricultores y las asociaciones de mineros.

El conjunto de estas organizaciones representa los intereses de la comunidad empresarial en América Latina; son, para decirlo de otra manera, las distintas expresiones socioeconómicas de las fracciones del

capital, y en su conjunto responden a los intereses del capital genérico o capital total.

Encontramos en América Latina un conjunto de organizaciones que responden a distintas formas de organización y orientación político-ideológica.

Grupos de presión que expresan los intereses de la derecha más radical, tradicional y conservadora, se oponen a cualquier cambio importante en la estructura agraria y en la tenencia de la tierra. Buscan mantener vigente el modelo agroexportador y rechazan cualquier proceso de modernización capitalista. Es el caso de las oligarquías centroamericanas.

Asimismo, optan por un régimen de exclusión social y de participación política. Promueven la constitución de un sistema autoritario. Su perspectiva económica se asienta en el planteamiento de la economía de mercado y en el control privado de la producción y gestión económicas. Su programa de acción promueve la defensa del latifundio y se opone a la reforma agraria, al cooperativismo o a cualquier forma de tenencia social.

Políticamente, proclaman el respeto de las instituciones de la democracia liberal.

En cambio otras formas de organización empresarial que han sido calificadas de derecha democrática se inclinan por un desarrollo industrial acelerado mediante cambios profundos y la redefinición de la economía nacional. Son defensoras de la modernización del capitalismo nacional. Optan por un régimen de participación política, en el marco de un sistema político de democracia controlada. Su perspectiva económica se basa en el liberalismo económico y en la vigencia del mercado libre en la que el Estado debe asumir funciones reguladoras y de árbitro, en una especie de consideración instrumental del aparato estatal en beneficio de sus intereses.

Su programa de acción busca la coordinación real y efectiva del sector empresarial y la ideologización del resto de la sociedad con base en sus valores y símbolos. Sin embargo, se observan en ella indicios de falta de unidad política e ideológica, variando por lo tanto su acción de acuerdo con las circunstancias y con sus posibilidades.

Políticamente se atribuye la representatividad de la sociedad y asume un compromiso con la patria y su destino, e identifica el progreso y crecimiento del país con el destino del sector empresarial.

Ideológicamente se atribuye para sí el carácter de intérprete de los verdaderos intereses del pueblo latinoamericano y de abanderado de

ciertos valores absolutos como la libertad, la justicia y la democracia. Asume el pluralismo político como principio.

El documento constitutivo de esta organización da la impresión de ser un esfuerzo de las minorías selectas para reconstruir la hegemonía y la orientación política de la región.

Sus formas de acción prioritarias son la propaganda política y el discurso a través de los mensajes orientados a la opinión pública, en las que aparece siempre un destinatario social y un objetivo preciso. En muchas de ellas su mensaje está dirigido a las fuerzas armadas, y en todas ellas buscan descalificar a la izquierda como expresión ajena a los verdaderos intereses del pueblo nacional y regional.

Mantiene relaciones antagónicas con los gobiernos en particular; sus miembros se sienten afectados por las reformas agraria, financiera y del comercio exterior.

Ideológicamente se ubican en una postura neoliberal y neoconservadora.

III. EL PROYECTO POLÍTICO NEOCONSERVADOR DE LA DERECHA LATINOAMERICANA

La crisis del sistema capitalista pone de manifiesto para la derecha regional la necesidad de reorganizar el conjunto de la sociedad, de fundar un nuevo orden, en fin de reestructurar las bases del capitalismo nacional. Se trata de un proyecto de refundación capitalista. El sistema para esta tendencia no ha fallado, los que han fallado son los hombres que lo han conducido.

Acorde con ese criterio valorativo, sus defensores plantean la necesidad de reducir las expectativas, asimismo, recomiendan transformar las reivindicaciones, promover nuevos valores como la auto-limitación y la disciplina y frenar los valores que giran alrededor del consumo. El sistema debe establecer un nuevo orden no-político, basado en la familia y el individuo en vez de las clases y sectores sociales. La irracionalidad de las expectativas invadió el espacio de los sectores dominantes alterando la normas de distinción que se hace entre ambos y el normal funcionamiento de la sociedad.

El mercado y su fortalecimiento deben volver a constituirse en los mecanismos que devuelven a los nuevos sectores dominantes su espacio. En una situación que les permitiría replantear la problemática social en el marco del "nuevo orden" que hará de las masas una mayoría silenciosa. De manera tal que el pueblo y la democracia neoconservadora se alejen cada vez más de la democracia parlamentaria, por lo

que el pueblo queda reducido a ser mero espectador de los asuntos políticos, es decir, en una oposición sin alternativa.

El Estado, en estas circunstancias, al ubicarse por encima de la sociedad y con su tecnocratización, despoja al individuo de todo su contenido. El legislativo de esfera pública con funciones políticas, se convierte así en esfera crítica con valor público, para que les quede a los ciudadanos la ilusión de tener todavía una intervención activa y de control político.

La democracia que intenta ejercerse bajo este proyecto es de naturaleza plebiscitaria, en la que los electores se limitan a ratificar las decisiones que otros han tomado, en una especie de remilitarización de la vida social, basada en la fidelidad, en la obediencia y en el cumplimiento del deber, como valores incondicionales para salir de la crisis. Valores que a la vez definen, categorialmente, al amigo y al enemigo.

Esto permite a los sectores dominantes abandonar su ideología, para refugiarse en la ideología del sistema: "el mercado". Esta operación les facilita entender la situación en su sentido histórico para consumo interno y en su sentido ideológico para consumo externo. Este proceso favorece, asimismo, la esencialización de su identidad como nuevos actores y su reconocimiento por el resto de la sociedad, en mérito de sus atributos y capacidades antes que en su condición de clases dominantes.

En suma, se trata de imponer un orden político desprovisto de masas y excluyente de las opciones político-ideológicas, con base en una reformulación de los sujetos políticos y sociales que se transforman transitoriamente en administradores de la crisis. No se trata de una pura reconstrucción, ni una simple renovación de antiguas estructuras y métodos, se trata de la "constitución de un nuevo proyecto social", en el que la necesidad de apelar a principios de legitimidad los conduce a invocar el tema de la democracia y la reinstauración de principios e instituciones depuradas de sus vicios anteriores, en el marco de una relación entre la tecnocracia y las instituciones emergentes.

De estas consideraciones la derecha latinoamericana deriva en una visualización distinta de la crisis, concebida ya no como elemento disfuncional repentino sino como un momento de transición de una fase a otra del capitalismo.

Una vez más aparece como pivote teórico y práctico que impulsa y ordena la recuperación económica, de ahí también el imperativo de despolitizar los factores de la producción y el mercado; y puesto que el único compromiso es con la realidad, con lo que existe, el compromiso se transmuta en la generación de oferta (léase impulso a la iniciativa privada) que asegurar la viabilidad y el reflotamiento del sistema

económico. La lógica económica elaborada para este propósito supone la disminución de los gravámenes fiscales a las actividades que incentivan la oferta, el aumento del ritmo de trabajo y de su productividad, el incremento del ahorro y de las inversiones rentables. La combinación de estos elementos, más el libre curso del mercado, debería reducir los precios y los niveles de inflación, con lo cual, aunque los salarios nominales de los trabajadores se mantendrían bajos, a la larga se incrementarían sus percepciones reales. A pesar de que esta lógica ha estado siempre presente en el pensamiento económico de la derecha tradicional, lo novedoso es que su práctica esté apuntalada por la reconversión industrial.

Por otra parte, consolida en el liderazgo del proceso a una nueva minoría activa que sustituye a los sectores burgueses decadentes y obsoletos. Con ello, la reconversión económica no sólo se manifiesta como una de las más profundas reorganizaciones de los procesos productivos, financieros y comerciales, sino también es una agresiva recomposición de los sectores sociales con vigencia económica y por ello mismo con pretensiones de ser los nuevos actores políticos de la vieja derecha redefinida.

Esta exigencia subraya los perfiles notoriamente conservadores del modelo. Si bien sus defensores se cuidan mucho de definir la forma que deberá asumir la participación directa del Estado en la economía, no lo hacen menos cuando se trata de explicitar juicio alguno sobre la supresión de una de sus principales actividades: la negociación o conciliación de intereses contrapuestos. En efecto, la omnipresencia estatal radica en su carácter arbitral y sus elementos de mediación. Como la negociación estatal se ha resuelto siempre en compromisos de promoción social, el modelo neoconservador busca anular la negociación, razón por la cual también rechaza los compromisos. Para que sea posible este amurallamiento es necesario evitar los excesos de la democracia para prevenir el desorden y el desequilibrio, entonces el concepto clave para esta derecha es la desmovilización política.

Desmovilización ante todo de las masas. Bajo esta perspectiva se vuelve a actualizar la exhortación individual, la disciplina, la autolimitación y el blindaje de la opinión pública. La desmovilización desactiva al Estado, neutraliza su compromiso, le sustrae su contenido nacional y subsume su razón al ámbito económico.

Asimismo, replantear el contenido de la democracia a partir del conjunto de relaciones entre Estado y sociedad, por un lado, y por otro, de gobernantes y gobernados, constituye la matriz de su pensamiento. En este sentido, la constitución y fundamentación de un nuevo orden

desprovisto de los movimientos de masas aparece, de entrada, como *leit motiv* para definir los nuevos sujetos políticos.

Para la oligarquía tradicional, si el objetivo de preocupación tradicional había sido el conflicto (y por ello las distintas formas en las que se controla el poder político), en el momento actual ya no interesa la amplitud total del *poder* sino especialmente el control de las "zonas sensibles", a partir de las cuales se ordena a la sociedad, por lo que la fuente del poder decisivo traspasa tanto al Estado como al ámbito económico, radicándose en ciertas instituciones dirigidas por esta derecha redefinida.

Para responder a esta cuestión la derecha establece que los límites entre lo prohibido y lo permitido conforman una peculiar "escena política", el principal mecanismo de relación entre gobernantes y gobernados. En gran medida, la escena política siendo expresión del tipo de Estado vigente, abarca una significación mayor de la que se atribuía al Estado de derecho en América Latina. La escena política asegura la participación o exclusión de los sectores sociales definiendo con ello un ordenamiento social. Ordenamiento que, a su vez, precisa la relación entre fin-medio-estrategia. El fin da cuenta, a nivel global, del proyecto de orden al que aspira la sociedad; los medios definen las instituciones idóneas, y la estrategia expresa el programa político. Existe entonces, como segundo elemento, una correspondencia entre tipo de escena política y red institucional, que en el momento actual desdeña la antigua relación entre gobernantes y gobernados como requisito para lograr la viabilidad económica, garantizar la administración de la crisis y su superación, a más de neutralizar el conflicto que devasta las relaciones sociales. En último término, aspiran a lograr nuevas formas de cohesión y solidaridad social con base en estos principios, en la situación de crisis actual, el orden se erige como valor supremo frente a las ilusiones de progreso o democracia. De ahí que ya no sean necesarias otras opciones, ni tampoco la referencia a los viejos símbolos nacionales que han perdido capacidad de convocatoria, porque lo único que interesa es la *realidad* y su imperativo de sobrevivencia: *realidad* de sobrevivencia, *sobrevivencia* de la realidad. Es decir que para esta derecha: a) el poder está determinado por la realidad, y b) la realidad del poder es la que determina el orden.

De ahí su famosa distinción bipolar entre "minoría activa" y "mayoría silenciosa", en la cual la primera debe dirigir la red institucional y la segunda conformarse, actitud que deviene indispensable para garantizar el orden también su necesidad de seguridad. El mantenimiento del conformismo es vital porque permite redistribuir los recursos y

mantener la disciplina mediante un estricto control de carácter individual. El autoritarismo de la "minoría activa", aunque supone una cosificación de la vida ya no se impone a partir de la coerción física puesto que la "mayoría silenciosa" se despoja a sí misma de sus proyectos, y porque su decisión está dada en favor de las expectativas de seguridad individual y por una democracia y orden sin objetivos. Por todo ello deben reestructurarse, en profundidad, los mecanismos tradicionales de intermediación en favor de un orden estatal despolitizado.

En este sentido, la transformación de América Latina únicamente puede darse a partir de la solución de las antinomias: orden-desorden; seguridad-inseguridad y viabilidad-obsolescencia.

Finalmente, esta opción tiende a orientarse al "mercado", al "plan", al "liberalismo" y a la "dirección" de la economía. Viene a ser una especie de resurrección del liberalismo en la vertiente neoconservadora. Este lineamiento político-económico tiene por objeto constituirse en la base de su nuevo paradigma. Se traduce en asegurar una mayor libertad para que las fuerzas del mercado establezcan las relaciones fundamentales de la economía y la sociedad.

En el fondo este proceso de fortalecimiento y reestructuración de la derecha es un intento de constituir una nueva clase política dirigente.

De manera que el problema central para esta derecha descansa en lo siguiente:

- a) acuerdos sobre las formas que debe asumir el proceso;
- b) modernización o endurecimiento de sus posiciones en tanto que conductores del nuevo proceso de institucionalización;
- c) necesidad de incorporar a la pequeña burguesía y a la oposición burguesa, eliminando los aspectos más conflictivos de las relaciones políticas al interior de la clase dominante, y
- d) encontrar una salida capitalista a la crisis. El sistema no se hunde por sí mismo, deben surgir en él acciones políticas alternativas.

Entre otros estos son los aspectos que configuran el proyecto político de la derecha neoconservadora que se plasma en las acciones de los grupos de presión.